



GD-F-008 V.9

Página 1 de 5

**RESOLUCIÓN No. SSPD - 20164010062085 DEL 10/11/2016**

**“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”**

**LA COORDINADORA DEL GRUPO DE CERTIFICACIONES E INFORMACIÓN DE LA  
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO**

En ejercicio de las atribuciones previstas en la Resolución No. SSPD 20101300015115 del 5 de mayo de 2010, en el artículo 16 del Decreto 416 de 2007 y,

**CONSIDERANDO:**

**1. ANTECEDENTES**

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 16 del Decreto 416 de 2007, le corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) definir la metodología y adelantar el proceso de certificación de las coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado para los entes territoriales beneficiarios de regalías directas y compensaciones monetarias.

Mediante la Resolución N° SSPD 20101300015115 del 5 de mayo de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.709 el día 14 de mayo de 2010, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios estableció la metodología de certificación de las coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado, de conformidad con las definiciones y las coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado establecidas en el Decreto 1447 de 2010, el procedimiento y requisitos para la expedición de la certificación en mención para los fines del Decreto 416 de 2007 y periodicidad de las mismas.

Que la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios en el artículo 4° de la Resolución N° SSPD 20101300015115 del 5 de mayo de 2010, asignó a la Coordinadora del Grupo de Certificaciones e Información de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la función de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación o no de la cobertura mínima de agua potable y alcantarillado de los entes territoriales que son beneficiarios de regalías directas y compensaciones monetarias, y en su artículo 8° le otorgó competencia para que decida sobre los recursos de reposición que se interpongan contra tales actos administrativos.

**2. DE LA RESOLUCIÓN DE NO CERTIFICACIÓN**

Que tal como lo establece el Artículo 4° de la Resolución N° SSPD 20101300015115 de 2010, las entidades territoriales debían enviar comunicación expresando su intención de ser certificados en coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado a la Coordinadora del Grupo de Certificaciones e Información, acompañándola de la acreditación de la representación legal del solicitante y del poder correspondiente cuando se actuara a través de apoderado y reportar al SUI la información de que tratan los artículos 3° y 6° de la Resolución en mención, antes del 30 de abril de cada año.

Que vencido el término otorgado al Municipio de MONIQUIRÁ-BOYACÁ, para que presentara la solicitud y reportara la información de que tratan los artículos 3° y 6° de la Resolución N° SSPD 20101300015115 de 2010, y verificados los registros del archivo documental de esta entidad, se encontró que el Alcalde del Municipio de MONIQUIRÁ del Departamento de BOYACÁ, no presentó la solicitud en la que manifestara su intención en ser certificado en coberturas mínimas.

Que el inciso 3° del artículo 4° de la Resolución N° SSPD 20101300015115, señala: “(...) En todo caso, la posibilidad de requerir información adicional o su complementación sólo se aplica respecto del requisito establecido en el numeral 2 del artículo 3° de la presente resolución, para lo cual, la entidad territorial deberá enviar ésta información a más tardar el 9 de junio del año correspondiente”, y teniendo en cuenta que el Municipio del MONIQUIRÁ del Departamento de BOYACÁ, no envió la solicitud señalada anteriormente, esta entidad no requirió solicitar información adicional.



Que mediante la Resolución No. SSPD 20164010025025 del 29 de julio de 2016, esta Superintendencia decidió NO CERTIFICAR en coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado al Municipio de MONIQUIRÁ-BOYACÁ para el año 2015, en razón a que el municipio no envió solicitud alguna donde expresara su intención de ser certificado.

### **2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20164010025025 del 29 de julio de 2016.**

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20164010025025 se envió citación al señor Alcalde del Municipio de MONIQUIRÁ del Departamento de BOYACÁ mediante oficio SSPD 20164010443141 del 29 de julio de 2016, enviado por correo el 6 de septiembre de 2016, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Vencido el término para realizar la diligencia de notificación personal, sin que ello ocurriera, se procedió a enviar la notificación por aviso mediante el oficio No. SSPD 20164010545841 del 14 de septiembre de 2016, según la empresa de correos 4-72, dicho documento fue entregado en la Alcaldía de MONIQUIRÁ el 26 de septiembre de 2016.

Ahora bien, el señor MARIO JULIÁN MUNEVAR UMBA en calidad de apoderado del Alcalde del Municipio de MONIQUIRÁ-BOYACÁ, mediante el documento radicado en esta entidad bajo el No. SSPD 20165290669932 del 3 de octubre de 2016, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20164010025025 del 29 de julio de 2016.

## **3. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN**

### **3.1 Análisis de forma**

El artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), establece que para efectos de ser admitido y resuelto, el recurso de reposición debe interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el apoderado especial del Alcalde del Municipio de MONIQUIRÁ del Departamento de BOYACÁ, además se confirma que fue interpuesto dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, el escrito radicado con el No. SSPD 20165290669932, reúne los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A., por lo tanto, se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

### **3.2. Argumentos de la parte recurrente**

Se fundamenta el recurso del recurrente en los siguientes argumentos:

*"SUSTENTACIÓN (sic):*

*El propósito del recurso que se interpone es que su Despacho revoque en su integridad la providencia impugnada y que una vez sea entregada la documentación pertinente se disponga CERTIFICAR las coberturas mínimas en Agua Potable y Alcantarillado al Municipio de Moniquirá, Boyacá para la vigencia del 2015.*

*Empiezo por señalar que la Administración anterior no dejó preparados las actuaciones necesarias en lo que tiene que ver con la certificación agua potable y alcantarillado para el Municipio de Moniquirá.*

*La Administración de Doctor ANCISAR PARRA AVILA como alcalde Municipal, ante la desorganización galopante de la anterior, debió esperar primero trazar su carta de navegación inicial en el Plan de Desarrollo para el Municipio vigencia 2016- 2019, que son los cuatro años donde la administración de acuerdo a la capacidad presupuestal dejó plasmadas las iniciativas del gasto para la ejecución de estudios y obras y donde se implementaron las acciones para cumplimiento a requerimiento prioritarios y es así como se viene desde las Secretarías trabajando en la forma de cómo se lograra que el Municipio de Moniquirá sea certificado; pero además, había que esperar la aprobación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) cuya vigencia va desde el año 2016 hasta el año 2028, donde en dicho documento efectivamente quedaran planteadas y resueltas cada uno de los compromisos futuros por los tres periodos, a fin de garantizar las coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado al Municipio.*

*No ha sido culpa de esta administración, dado los inconvenientes que se han presentado, no obstante superada las dificultades en especial las presupuestales, se está preparando el documento técnico para ser presentado con todos sus anexos y así el Municipio de Moniquirá sea CERTIFICADO.*

*Por todo lo anterior, se le solicita a su Despacho muy comedidamente que tenga en cuenta las anteriores*

circunstancias, para que nos permita replantear esta situación en términos considerables, permitiendo presentar la documentación pertinente y reportar al Sistema Único de Información SUI la información requerida.

Como corolario plausible de lo anteriormente enunciado, se sirva revocar el auto impugnado disponiendo ampliar el término para acceder a la CERTIFICACION de las coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado al Municipio de Moniquirá Boyacá."

### 3.3 De las pruebas anexas al recurso

En el documento radicado en esta entidad bajo el No. SSPD 20165290669932 del 3 de octubre de 2016, con el que sustentó el recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20164010025025 del 29 de julio de 2016, el recurrente allega los siguientes documentos:

3.3.1. Poder Especial otorgado por el Alcalde de MONQUIRÁ al señor MARIO JULIÁN MUNÉVAR UMBA.

3.3.2. Certificación de la Secretaria de Gobierno en la que hace constar que el señor ANCISAR PARRA ÁVILA ejerce actualmente las funciones de Alcalde municipal de MONQUIRÁ.

3.3.3. Acta de posesión del Alcalde Municipal para el periodo 2016-2019.

Los anteriores documentos en su valor integral, se anexan al expediente.

## 4. ANÁLISIS DE FONDO

Esta Superintendencia procederá a analizar cada uno de los argumentos expuestos por el recurrente, lo cual se hará de la siguiente manera:

### 4.1. Acciones adelantadas para obtener la certificación.

Señala el recurrente que la anterior administración no entregó la información relacionada con el proceso de certificación en cuestión, por ello el actual Alcalde Municipal trabajó en la definición de las iniciativas del gasto para la ejecución de las obras e implementación de acciones que quedaron plasmadas en el Plan de Desarrollo y en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Con estos planes aprobados, las secretarías municipales empezaron a determinar las acciones que permitan al Municipio obtener la certificación. Con la anterior descripción de las acciones que ha adelantado el Alcalde, el recurrente concluye que no es culpa de la Administración no contar con la información que les permita ser certificados.

Al respecto debemos manifestar, que para el proceso de certificación se establecieron obligaciones claras y términos precisos que debían cumplir los municipios que tenían la intención de cambiarle el destino a sus recursos de regalías en el 2017, independientemente de los cambios presentados en la administración municipal, aceptar estas exculpaciones sería poner en situación de desigualdad a aquellos Entes Territoriales que bajo las mismas circunstancias si acataron las exigencias del procedimiento, además las normas que soportan éste proceso (Ley 141 de 1994 y Decreto 416 de 2007), no contemplan esas circunstancias para efectos de evadir las obligaciones que hoy nos encontramos estudiando; por otro lado para que los planteamientos esgrimidos por el recurrente fueran tenidos como eximente de responsabilidad, debían enmarcarse dentro de los conceptos de fuerza mayor o caso fortuito, que están definidos por el Artículo 1° de la Ley 95 de 1890, en los siguientes términos:

*"Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público". (Subrayado fuera de texto).*

La jurisprudencia se ha pronunciado de manera reiterada sobre la misma materia, de donde se destaca lo siguiente:

*"Según el verdadero sentido o inteligencia del artículo 1° de la ley 95 de 1890, los elementos integrantes del caso fortuito o fuerza mayor (...), deben ser concurrentes (imprevisibilidad e irresistibilidad) lo cual se traduce en que si el hecho o suceso ciertamente es imprevisible pero se le puede resistir, no se da tal fenómeno, como tampoco se configura a pesar de ser irresistible pudo preverse. De suerte que la ausencia de uno de sus elementos elimina la estructuración de la fuerza mayor o caso fortuito.*

*Si sólo puede calificarse como caso fortuito o fuerza mayor el hecho que concurrentemente contemple los caracteres de imprevisible e irresistible, no resulta propio elaborar un listado de los acontecimientos que constituyen tal fenómeno, ni de los que no lo constituyen. Por tal virtud, ha sostenido la doctrina nacional y foránea que un acontecimiento determinado no puede calificarse fatalmente, por sí mismo y por fuerza de su naturaleza específica, como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, puesto que es indispensable, en cada caso o acontecimiento, analizar y ponderar todas las circunstancias que rodean el*

*hecho” Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil Sentencia de fecha noviembre 20 de 1989.”.*  
*(Subrayado fuera de texto).*

De acuerdo con lo anterior, se concluye, en relación con la fuerza mayor o caso fortuito:

- a) En cada caso concreto se debe analizar y ponderar todas las circunstancias que rodean el hecho, para determinar si éste constituye o no fuerza mayor o caso fortuito.
- b) Los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito deben ser alegados y probados por quien los invoca. Es decir, la carga de la prueba la debe soportar quien invoca tales hechos y no quien debe valorarlos.
- c) Debe tratarse de hechos imprevisibles e irresistibles, y por tanto sobrevinientes; esto es, que su previsión escape en condiciones normales a cualquier sujeto y no a una persona en particular, y que además de no haberse podido prever, sea imposible evitar que el hecho se presente.
- d) No constituyen fuerza mayor o caso fortuito los hechos que acontecen frecuentemente o con cierta periodicidad, ni hay fuerza mayor o caso fortuito cuando el obstáculo dificulta el cumplimiento de una obligación, pero no la imposibilita.
- e) Los hechos no deben ser atribuibles a la culpa, esto es, negligencia, descuido o impericia, de la persona que los invoca.

Sin lugar a dudas, las dificultades que aduce el recurrente no son hechos imprevisibles e irresistibles, y por tanto sobrevinientes, pues es evidente que el cambio de administración municipal tuvo obstáculos, pero los mismos no hacían imposible el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución No. SSPD 20101300015115 de 2010.

Así mismo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución de la Metodología de Coberturas estaba a cargo del Municipio, por lo cual, era a él a quien correspondía cumplirlos cabal y oportunamente. En tal sentido, debía tomar todas las medidas administrativas, técnicas y operativas que demandaran el cumplimiento de los mismos.

Así también, esta Superintendencia destaca que la intención o la diligencia que gobierna los actos de las personas es un elemento de la culpabilidad, la cual NO requiere ser probada en la presente actuación, por ser netamente de carácter administrativo. El hecho constitutivo del debate, es la falta del cumplimiento de los requisitos por parte del ente territorial para que pudiera ser certificado. Acciones de obligatorio cumplimiento para los entes territoriales, verificables de manera objetiva y precisa, frente a la cual no es menester realizar ningún juicio de culpabilidad.

Así las cosas, tratándose del ámbito del derecho administrativo cuando se presente un incumplimiento a una norma a la que esté obligado el administrado, no se requiere la prueba de los factores subjetivos propios del derecho penal, como lo son el dolo y la culpa, ni la ocurrencia de un daño para que la administración pueda ejercer su facultad certificadora. Es más, ni aún en el evento en que se hubiese tratado de una actuación administrativa sancionatoria había que probar tales elementos.

Lo anterior, ha sido resaltado en diversas oportunidades por la jurisprudencia colombiana. Para mayor ilustración, pueden transcribirse los siguientes fragmentos jurisprudenciales:

*“Respecto de la aplicación de la disposición contenida en el artículo 81.7 de la Ley 142 de 1994 al sub lite, que requiere el actor, se advierte que han coincidido la jurisprudencia y la doctrina en señalar que el derecho administrativo sancionatorio no necesita acudir al derecho penal, toda vez que posee una normatividad guiada por principios propios y autónomos que responden a unas finalidades y procedimientos diferentes a los del derecho penal. En consecuencia, las sanciones impuestas a los infractores por contravenciones administrativas, excluyen la prueba de los factores subjetivos propios de la conducta delictiva, como son el dolo y la culpa. Dentro de esta misma concepción se considera que los sujetos activos en el derecho penal, corresponden estrictamente a las personas naturales, pues solo respecto de ellas puede predicarse la culpa como elemento determinante de responsabilidad.”*<sup>1</sup> Subrayado fuera de texto

*“Para implantar sus políticas, el Estado impone obligaciones administrativas a cargo de quienes ejerzan actividades en el respectivo campo y, la eficacia de la gestión, exige un pronto cumplimiento y el control de este requiere objetividad y no puede quedar condicionado a la difícil prueba de los factores subjetivos, como son el dolo o la culpa, máxime cuando de antemano se sabe que ciertas actividades nunca pueden ser ejercidas por personas naturales sino por personas jurídicas”*<sup>2</sup>  
 Subrayado fuera de texto

Así mismo, es un hecho cierto y comprobado que el municipio no envió la solicitud en la que manifestara su interés en obtener la certificación, por lo cual, éste debe asumir las consecuencias, y es que no puede

<sup>1</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero Ponente: German Ayala Mantilla. Sentencia del trece (13) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998).

<sup>2</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejera Ponente: Consuelo Sarria Olcos. Sentencia del veintitrés (23) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995).

ser certificado.

#### **4.2. Ampliación de plazo para presentar la documentación pertinente y para reportar la información al SUI.**

El recurrente solicita que se les permita presentar la documentación pertinente y reportar la información al SUI autorizando la ampliación del término para acceder a la certificación.

Es necesario advertir al recurrente que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fijó como plazo único y máximo el 30 de abril de 2016 para efectos de reportar al SUI los requisitos establecidos en los artículos 3° y 6° y enviar la solicitud señalada en el inciso primero del Artículo 4° de la Resolución No. SSPD 20101300015115 de 2010 para el proceso en mención correspondiente a la vigencia 2015.

La fijación de este plazo no es caprichosa y responde a la necesidad de contar con dicha información para el cumplimiento de la expedición de los resultados del proceso en el término establecido en el inciso 2° del Artículo 16 del Decreto 416 de 2007, en consecuencia, no es posible acceder a la solicitud de plazo.

Como se expuso en la resolución recurrida, el Municipio de MONIQUEIRÁ no envió la solicitud señalada en el Artículo 4° de la Resolución No. SSPD 201013000115 de 2010, razón por la que se considera que es correcta la decisión de esta Superintendencia en dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo primero del Artículo 6° de la mencionada Resolución N° SSPD 20101300015115, el cual señala:

*"Parágrafo Primero. Se entenderá que la entidad territorial que no presente la solicitud mencionada en el artículo 4° de la presente resolución, dentro de los plazos establecidos, no está interesada en obtener la certificación de coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado, y por lo tanto, mediante acto administrativo motivado la Superintendencia No Certificará al respectivo ente territorial".*

En consecuencia, al no encontrarse vulneración de norma alguna aplicable a la materia, los argumentos del recurrente NO están llamados a prosperar.

En mérito de lo expuesto, esta Superintendencia

#### **RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR** la Resolución No. SSPD 20164010025025 del 29 de julio de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** personalmente la presente resolución al señor MARIO JULIÁN MUNEVAR UMBA como apoderado del Alcalde del Municipio de MONIQUEIRÁ del Departamento de BOYACÁ, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 69 del C.P.A.C.A.

**ARTÍCULO TERCERO.- COMUNÍQUESE** el contenido de la presente Resolución al Departamento Nacional de Planeación - DNP.

**ARTÍCULO CUARTO.-** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

#### **NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D. C.



**MARÍA EUGENIA SIERRA BOTERO**

Coordinadora Grupo de Certificaciones e Información  
Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e Información  
Expediente: 2016401351601417E